

Zarabanda Beltrán
Zarabanda & C. A.

Contraloría General de la República :: SGD 06-12-2019 09:31
Al Contestar Cite Este No.: 2019ER0136202 Fol:11 Anex:0 FA:0
ORIGEN EDGAR ZARABANDA COLLAZOS
DESTINO 80861-DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL PUTUMAYO / HANIER ROBERTH
HUERTAS CALDERON
ASUNTO NULIDAD Y ASPECTOS FRENTE ALA AUTO APERTURA N° 164
OBS

Bogotá D.C.,

2019ER0136202



Doctor

HANIER ROBERTH HUERTAS CALDERON

Directivo Colegiado Ponente

Gerencia Departamental Colegiada de Putumayo

Mocoa

Asunto: NULIDAD Y ASPECTOS FRENTE AUTO DE APERTURA No. 164
DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019

Referencia: Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2019-01055

EDGAR ZARABANDA COLLAZOS, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio con T.P. 180.590 expedida por el C.S. de la J. actuando como apoderado especial de **QBE SEGUROS S.A** previamente reconocido, me permito presentar escrito solicitando lo indicando en el asunto de este escrito, bajo los siguientes argumentos:

I. HECHOS:

Señala la primera instancia en relación con los hechos considerados como detrimento patrimonial, lo siguiente:

El Ministerio de Defensa Nacional. Ejército Nacional – Sexta División – Vigésimo Séptima Brigada Batallón de ASPC No. 27 celebro contrato de obra pública No. 129BAS27 con la firma Multiservicios Carvajal de Colombia EU cuyo objeto fue Mantenimiento, adecuación para las instalaciones de comando del Batallón Especial Energético Vial No. 21, en el municipio de Puerto Caicedo - Putumayo centralizado Administrativamente por el Batallón de ASPC No. 27.

Estima que seque se ha establecido objetivamente la causación de un daño patrimonial al Estado, si se tiene en cuenta que los recursos publicos desembolsados con cargo al contrato de obra pública, no cumplieron con su finalidad pues las obras contratadas no se llevaron a cabo.

El incumplimiento de la ejecución de la obra se habría generado por deficiencias en la planeación de la inversión, la falta de supervisión y seguimiento, así como el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratista y las partes intervinientes, carencia de revisión, vigilancia, presentación periodica de informes, verificación de la entrega de los bienes y un control interno deficiente. Dicho incumplimiento impacta negativamente el funcionamiento de la unidad militar, para optimizar actividades que hubieran contribuido al éxito de las operaciones militares

8873
18-12-19

Servicios
Jurídicos &
Contables



Se tiene entonces hasta el momento, la ocurrencia de un daño fiscal cuantificado preliminarmente en la suma de \$257.998.132,55

II. CONSIDERACIONES PARA SOLICITAR LA NULIDAD

A. Insuficiencia de Requisitos para Vincular a QBE SEGUROS S.A.,

En el proceso de responsabilidad fiscal existe una norma especial que establece la vinculación obligatoria de las aseguradoras al mismo. El precepto normativo corresponde al artículo 44 de la Ley 610 de 2000, que reza así "ARTICULO 44.- Vinculación del garante: Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado".

Respecto a la finalidad de la vinculación de la aseguradora al proceso de responsabilidad fiscal, determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-648 del 13 de agosto de 2002 que obedece al resarcimiento del patrimonio público y que dicha vinculación está delimitada por el riesgo amparado:

"En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza.

Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes 173 RIS, Bogotá (Colombia), 40(23): 161-204, enero-junio de 2014"

La responsabilidad fiscal su incidencia en los seguros amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas" (se destaca)

Sin embargo, para que la compañía de seguros pueda ser obligada a pagar el daño o perjuicio causado al patrimonio público es indispensable que se cumplan dos requisitos indispensables a saber:

*Zarabanda
Beltrán*

1. **Que exista una declaración de responsabilidad fiscal por haberse acreditado a cabalidad los elementos para su tipificación:** a) gestión fiscal, b) una conducta dolosa o gravemente culposa, d) un daño y e) la relación de causalidad respectiva.
2. **Que la cobertura prevista en el contrato de seguro ampare específicamente el hecho constitutivo de la responsabilidad fiscal**, teniendo en cuenta sus condiciones y limitaciones, tales como el alcance del riesgo cubierto, la vigencia, la suma asegurada, los funcionarios amparados y el deducible, entre otros.

De otra parte, no se puede perder de vista que **la aseguradora no es deudor solidario del presunto responsable fiscal debido a que la obligación de la compañía de seguros es diferente de la que corresponde al gestor fiscal.**

Sobre a los requisitos para que proceda la vinculación del tercero civilmente responsable dentro del proceso de responsabilidad fiscal ha sostenido la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante concepto No. 80112-0J-142 2017 del 10 de julio de 2017, lo siguiente::

Significa lo anterior, que la compañía aseguradora solamente se obliga a indemnizar, aquellos siniestros que están descritos y circunscritos a los riesgos contenidos en el contrato de seguro.

En este orden jurídico, para efectos de la vinculación del garante, debe realizarse el análisis de la póliza como tal, en el acápite de cobertura, vigencia y asegurado, para efecto de delimitar los riesgos amparados y el monto hasta el cual va a responder la compañía aseguradora.

Debe quedar claro que, la vinculación al proceso de la aseguradora es al comienzo del mismo y con la indicación exacta de su calidad, el número de la póliza de garantía, objeto de la misma, cobertura, tomador, el beneficiario y todos los elementos que le permitan al garante establecer la legalidad de su llamamiento.

En este orden, el garante responde de acuerdo con la garantía que se haya tomado, su cobertura y valor. Por ello, el investigador fiscal debe verificar que efectivamente existe una póliza de garantía que ampare el presunto responsable, el bien o el contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso.

Dicho en otras palabras.: en la providencia de vinculación del tercero civilmente responsable se debe precisar todos los aspectos relevantes que conduzcan a la verdadera indemnización al patrimonio del Estado, sin que sea dable una vinculación del garante en forma genérica, sin entrar a puntualizar las coberturas y exclusiones de la garantía.
(Subrayado mio)

Analizado en su contexto el auto de apertura decide vincular a mi representada así:

Zarabanda Beltrán
6

Por tanto, se ordenará la vinculación al presente proceso de responsabilidad fiscal, como terceros civilmente responsables, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, a las siguientes aseguradoras:

| Nombre | NIT | Póliza | Riesgo amparado |
|---|---------------|-----------------|---|
| Seguros del Estado | 990.000.978-8 | 81-44-101022398 | Cumplimiento del contrato (entre otros) |
| Zurich Colombia Seguros S.A. ¹ | 900 846.984-0 | 000703237137 | Manejo entidades oficiales -- Fallos con Responsabilidad Fiscal |

Sin embargo, se evidencia que:

En el auto de APERTURA proferido por el a-quo que no se atendió lo establecido en el concepto emitido por la Oficina Jurídica del máximo ente de control fiscal, pues para que proceda la vinculación de la compañía de seguros, es necesario que se determine, el tomador, asegurado, los funcionarios amparados, vigencia de la póliza, valor o monto por el cual debe responder la aseguradora, riesgo asegurado y beneficiario de la póliza; máxime si se tiene en cuenta que dentro del contrato de seguro, la primera instancia tenía los elementos para extraer analizar y estudiar tales requisitos.

Se debe señalar que en dicho concepto se establece con precisión que al investigador fiscal no le es dable efectuar una vinculación en forma genérica, pues debe entrar a puntualizar cada uno de los elementos precedentemente referidos, hecho que para el presente caso no aconteció.

Precisamente, no se establecen con certeza las acciones y omisiones imputables a empleados de la asegurada, las disposiciones legales y reglamentarias ; en fin, el auto de apertura acusado se resiste a la legalidad, porque carece de precisión en todos los aspectos relevantes que conduzcan a la verdadera indemnización al patrimonio del Estado.

En consecuencia, existen razones suficientes para solicitar al Despacho **proceda a Decretar la Nulidad a partir del Auto de Apertura, amparado en la causal enmarcada en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000 “O la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso”**; teniendo en cuenta que no se cumplen los requisitos mínimos para que proceda la vinculación, como me referí precedentemente, lo que imposibilita ejercer en debida forma el derecho de defensa que tiene sus génesis en el debido proceso, toda vez que **no se determinó el análisis de la póliza como tal, en el acápite de cobertura, vigencia y asegurado, para efecto de delimitar los riesgos amparados y el monto hasta el cual pretende que responda la compañía aseguradora.**

III. CONSIDERACIONES PARA SOLICITAR ARCHIVO

A. Proceso de Responsabilidad Fiscal Vs Acción Contractual

Desde el punto de vista legal, jurisprudencial y doctrinario ha existido uniformidad en calificar el proceso de responsabilidad fiscal como de naturaleza resarcitoria, en cuanto pretende un reintegro por el detrimento patrimonial causado a la entidad estatal y excluye la naturaleza sancionatoria. Así, lo dispone el artículo 4 de la Ley 610 de 2000.

Al ser de naturaleza resarcitoria, el mismo artículo, en su parágrafo 1°, se encarga de precisar que esa característica la diferencia de otros procesos que tiene otras finalidades. Precisamente, en sentencia de Unificación SU 620 de 1996, que se podría calificar como marco conceptual señalado por la Corte Constitucional en materia de la responsabilidad fiscal, se indicó:

“Dicha responsabilidad no tiene un carácter sancionatorio, ni penal, ni administrativo (párrafo art. 81 Ley 42 de 1993). En efecto, la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal”

Por lo tanto, la autonomía del proceso de responsabilidad fiscal no excluye la posibilidad de que puedan existir actuaciones paralelas de orden disciplinario, administrativo o penal. No obstante, si la reparación del daño se ha obtenido plenamente a través del proceso penal, habrá de cesarse el proceso de responsabilidad fiscal, toda vez que el daño patrimonial causado al erario ha sido resarcido. Así lo manifestó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia de octubre 16 de 2003. Expediente 2001 0318. Sección Primera, Subsección B, en la cual se indicó

“ Una vez obtenida la indemnización de perjuicios a través del proceso penal, no es procedente un nuevo reconocimiento mediante el proceso de responsabilidad fiscal”

Para el caso en estudio, se tiene que dentro del auto de apertura se indica lo siguiente:

Dicha cuantificación se basa en el valor total de los recursos públicos erogados con cargo al contrato 129 BASPC27-2016, en concordancia con la documentación soporte de la declaratoria del incumplimiento del contrato, además de lo expresado por tres profesionales en ingeniería civil que inspeccionaron el sitio donde debieron desarrollarse las obras, incluyendo el profesional de ingeniería civil que designó esta Gerencia Departamental Colegiada, quien concluye que: *“...no se cumplieron las obligaciones contractuales, el faltante de obra asciende al 100% de dicho contrato”*.

Por consiguiente y teniendo en cuenta que se está ventilando ante la jurisdicción ordinaria procesos de controversias contractuales con los cuales se está solicitando

Zarabanda Beltrán
Abogado S. de C. A.

decretar el incumplimiento del contrato por un faltante que asciende al 100%, es decir, al valor total del contrato, suma que en resumidas cuentas es la que se determina dentro del proceso de responsabilidad fiscal, como detrimento patrimonial. **NO puede perder de vista el Despacho que no es dable adelantar proceso de responsabilidad fiscal alguno, puesto que el resarcimiento se esta adelantando a través de la acción contractual**

Lo anterior teniendo en cuenta que la razón de ser del proceso de responsabilidad fiscal, es el resarcimiento del detrimento patrimonial, no estaria dado puesto que el mismo esta llamado a prosperar a traves de las resultas que se obtienen con el juez del contrato.

En consecuencia solicito de manera atenta al Despacho proceda a decretar el ARCHIVO del presente proceso de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que el resarcimiento del presunto detrimento patrimonial se obtiene a través del juez contractual.

IV. CONSIDERACIONES PARA OTROS ARGUMENTOS A TENER EN CUENTA

A. Clausula CLAIMS MADE

El seguro para Directores y Administradores es un seguro de daños patrimoniales. En este contrato de seguro las partes del contrato son la compañía de seguros como el asegurador y el grupo corporativo o compañía como el tomador que traslada los riesgos. Los asegurados cuyo patrimonio puede resultar afectado como consecuencia del siniestro son los directores y administradores de la compañía o incluso esta, en virtud de la cobertura de reembolso a la entidad.

Las pólizas incluyen una amplia definición de asegurado. Para este efecto, es asegurado la persona natural que, *"Bajo la denominación de director, consejero, administrador, director general, gerente, representante legal o cualquier otro equivalente, haya ostentado u ostente la cualidad de miembro de la junta directiva, consejo de administración, u otros órganos de administración del grupo corporativo y quienes ejerzan o detenten esas funciones u ostenten poderes que impliquen el ejercicio de facultades de de decisión o gobierno del grupo corporativo"*

Conforme a lo anterior, se puede concluir que la base de cobertura es *claims made* lo que significa que el siniestro como "la realización del riesgo asegurado"¹ es la reclamación por los actos de los administradores. Esta debe ser presentada durante la

¹ Código de Comercio Colombiano. Artículo 1072. Ob cit



vigencia de la póliza sin importar la fecha de ocurrencia salvo que se estipule una fecha de retroactividad que constituye el límite impuesto por la aseguradora *"antes del cual los hechos ocurridos se encuentran excluidos"*². Una vez ocurrido el siniestro como hecho futuro e incierto (condición suspensiva) surge la obligación del asegurador de pagar la indemnización.

En nuestro país se mantuvo el principio general, según el cual en el seguro de responsabilidad civil se amparan los hechos generadores de responsabilidad del asegurado ocurridos durante la vigencia del contrato de seguro, sin importar que las acciones en contra del asegurado prescriban muchos años después de terminada la vigencia del mismo. Sin embargo, el panorama cambió con la expedición de la Ley 389 de 1997, pues ésta permitió pactar cláusulas Claims Made en el seguro de responsabilidad civil, y abrió la posibilidad para que el Gobierno Nacional extendiera la posibilidad de pactarlas en otro tipo de contratos de seguro.

Según Sobrino, las cláusulas Claims Made, se refiere a que no sólo el hecho generador del daño debe ocurrir dentro de la vigencia de la Póliza, sino que además el reclamo de la víctima también debe realizarse dentro de la vigencia de la misma, o en un plazo determinado con posterioridad al vencimiento de esta. El que el reclamo deba hacerse dentro de este tiempo, o en sus renovaciones o dentro de un periodo de tiempo después de su vencimiento, genera una nueva condición para que se cubra efectivamente el riesgo asegurado.

La Ley 389 de 1997 determinó la posibilidad de que las partes en el contrato de seguro de responsabilidad civil consagren estipulaciones con el objeto de limitar en el tiempo la cobertura de una manera concreta, conocidas por la doctrina como cláusulas *claims made*, para cuyo efecto se tiene que el artículo 4º del precepto legal citado, señala lo siguiente:

"Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años" (se destaca).

En ese sentido, la norma transcrita consagra la posibilidad de que las partes estipulen un término dentro del cual las reclamaciones que se presenten por siniestros registrados durante la vigencia del seguro sean objeto de cobertura.

Sin embargo, si se revisa lo expuesto por el Despacho frente a la póliza expedida por mi prohijada y afectada dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, que

² ACE. ACE Elite, Miembros de Junta Directiva y Altos Ejecutivos. Código Superintendencia Financiera 27/05/2010-1305-P-06-12RCDOELITE001

Zarabanda Beltrán
Abogado S. A. S.

ampara el ejercicio del cargo de unos altos funcionarios de la Secretaria, vinculados al presente proceso de responsabilidad fiscal, póliza No. 000706272341, se evidencia que:

1. La vigencia de la cobertura inicio el 1° DE ENERO DE 2016 y llegó hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2016, de conformidad con el anexo de terminación anexo.
2. El plazo para realizar la reclamación ante la aseguradora venció el 31 de diciembre de 2018, fecha en que finalizaron los dos años siguientes a la terminación de la vigencia del seguro.
3. La fecha en que se profirió el auto por el cual se vincula a mi prohijada, que no es otro que el auto de apertura, es dictado el 23 de octubre de 2019.

En consecuencia, **transcurrieron más de dos (2) años y diez (10) meses, desde el vencimiento de la vigencia de la cobertura de la citada póliza, generando una evidente y clara transgresión de lo estipulado por la Ley 389 de 1997, la cual determina como plazo máximo para la cobertura del riesgo de dos (2) años.**

Por consiguiente, se tiene que la vinculación de mi defendida carece de soporte y fundamento legal conforme lo establece la Ley 389 de 1997, lo cual conlleva de manera clara y necesaria a que el Despacho proceda de manera inexorable a decretar la DESVINCULACION de mi representada, como quiera que existe una clara y evidente transgresión de la Cláusula *Claims Made*, contenida en el artículo 4 de la Ley 389 de 1997.

B. Coaseguro

Se desprende de las pólizas objeto de vinculación al presente proceso de responsabilidad fiscal lo siguiente:

| Aseguradora | Porcentaje de participación | Valor asegurado | Valor Prima cobrada |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| QBE Seguros S.A | 21.5% | \$215.000.000 | \$34.494.247 |
| MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. | 12% | \$119.999.967 | \$16.172.182 |
| LA PREVISORA S.A. CIA. DE SEGUROS | 22% | \$215.000.039 | \$28.975.172 |
| AXA COLPATRIA SEGUROS S.A | 22% | \$ 224.999.997 | \$30.322.849 |
| ALLIANZ SEGUROS S.A. | 22% | \$224.999.997 | \$30.322.849 |

No obstante lo anterior, la primera instancia no determina que la póliza objeto de vinculación está bajo la modalidad de coaseguro donde cada una de las compañías



Zarabanda Beltrán
Escritor

debe responder por un porcentaje de acuerdo a su grado de participación al momento de suscribir el contrato de seguro.

En consecuencia:

Se solicita de manera atenta al Despacho se proceda a MODIFICAR el Auto de Apertura, efectuando la aclaración del caso y se indique puntualmente mi representada en que porcentaje y por cual valor debería responder dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal

C Sobre el Deducible

El Deducible es definido como aquella parte del riesgo que una vez ocurrido el siniestro debe asumir el asegurado. Su principal finalidad consiste en que el asegurado o tomador tenga interés en la conservación del estado del riesgo.

Es un concepto que está directamente legado con el de valor asegurado que es el monto máximo que asume una aseguradora en el amparo de un riesgo determinado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1079 del Código de Comercio. En el evento de un proceso fiscal, cualquier condena en contra del gestor fiscal amparado en la póliza, la cual es la suma que se establezca en el correspondiente contrato, en las cláusulas se establece que el riesgo va hasta determinado monto, es por ello que el deducible se incluye como valor a descontar por el siniestro.

Para el caso de los proceso de responsabilidad fiscal el deducible es aplicable al siniestro individualmente considerado, posición que ha sido reiterada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de septiembre de 1993 y en conceptos de la Superintendencia Financiera de Colombia se ha establecido que en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor asegurado sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado.

El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

Así las cosas, correspondiendo el deducible pactado a una carga que debe soportar el asegurado, la aplicación previa del mismo al valor asegurado, para efectos de establecer el monto indemnizable, es una consecuencia de la ejecución del contrato.

Zarabanda Beltrán
S. A. S.

En ese orden de ideas es claro que en el proceso de responsabilidad fiscal se debe aplicar el deducible; no obstante el Despacho no tuvo en cuenta el deducible y en consecuencia:

Se solicita de manera atenta, se proceda a MODIFICAR el Auto de Apertura incluyendo el valor del deducible en los términos anteriormente previsto

D. Respetto de la Póliza y Cobertura del Cargo

Señala el auto de apertura en relación con QBE SEGUROS S.A , al momento de proceder a vincularla lo siguiente:

Por tanto, se ordenará la vinculación al presente proceso de responsabilidad fiscal, como terceros civilmente responsables, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 010 de 2000, a las siguientes aseguradoras:

| Nombre | NIT | Póliza | Riesgo amparado |
|--|---------------|-----------------|---|
| Seguros del Estado | 860 000.878-8 | 01-44-101022389 | Cumplimiento del contrato (entre otros) |
| Zurich Colombia Seguros S.A ¹ | 900 848.984-0 | 000703237137 | Manejo entidades oficiales -- Fallos con Responsabilidad Fiscal |

Respetto de los presuntos responsables vinculados al proceso señala lo siguiente:

Rubel Yoris del Río Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía 79.885.885, en su condición de Oficial De Operaciones entre el 03/08/2015 y el 15/02/2017, quien suscribió el "Informe de supervisión No. 001" del contrato 129-BASPC27-2016, en el cual indicó, entre otras cosas, que "luego de adelantar la Inspección a los bienes y/o servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro de los plazos establecidos".

Sin embargo, de acuerdo a lo expresamente definido en el marco del contrato de seguro del que se reclama cobertura, conforme a lo expresado en la respectiva Póliza, se identifican los siguientes cargos o funcionarios amparados por la misma, así

"LAS UNIDADES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN MEDIANTE COMUNICACION N.20161291130771 MDN-CGFM-COEJC-SECEJCOFIP-DEFIN CARGOS A AFIANZAR UNIDADES TACTICAS EJERCITO NACIONAL

1. COMANDANTE UNIDAD
2. EJECUTIVO Y 2 COMANDANTE
3. ORDENADOR DEL GASTO
4. OFICIAL S2
5. OFICIAL S3
6. OFICIAL S4
7. COMANDANTE DE COMPAÑIA
8. JEFE DE PRESUPUESTO



*Zarabanda
Beltrán*
Servicios Jurídicos & Contables S. A. S.

9. TESORERO
10. AUXILIAR DE TESORERIA
11. ENLACES
12. SUBOFICIAL DE ALIMENTACION
13. ALMACENISTA
14. AUXILIARES DE ALMACENISTAS
15. JEFE DE BIENES EN SERVICIO
16. JEFE DE REMONTA Y VETERINARIA
17. JEFE DE TRANSPORTES
18. CENTRALES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
19. AREAS DE INVENTARIOS
20. AREAS DE TESORERIA
21. AREAS DE PRESUPUESTO

Nótese que el cargo de Oficial de Operación que lo ostentó el señor RUIBER YESIS DEL RIO MUÑOZ quien ejerció la supervisión del Contrato, no está amparado por la antelada póliza, motivo por el cual no es dable que el Despacho proceda a vincular a mi defendida.

En consideración de lo expuesto:

Solicito de manera atenta procesa a DESVINCULAR a QBE SEGUROS S.A puesto que el presunto responsable antes referido no se encuentra amparado por la póliza expedida por mi representada.

Corolario de todo lo expuesto, solicito a su Despacho proceda a evaluar los argumentos manifestados y declarar las solicitudes presentadas, dando lugar a la desvinculación de mi representada del proceso de la referencia.

Mi dirección de notificaciones es Carrera 69b 24A – 51 de Bogotá D.C , teléfono móvil 3054008172 y fijo 2591956, y dirección electrónica de correo zarabandabeltran@gmail.com .

Cordialmente,


EDGAR ZARABANDA COLLAZOS
C.C. No. 80.101.169 de Bogotá.
T.P. 180.590 del C.S.J.